



Medellín, diecisiete (17) de agosto dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	RECURSO DE APELACIÓN- EJECUTIVO
EJECUTANTE:	PORVENIR S.A.
EJECUTADO:	AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.
PROCEDENCIA:	JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO
RADICADO:	05001-31-05-006-2021-00356-01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a decidir el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el apoderado judicial de PORVENIR S.A., contra el auto del 19 de julio de 2022, dictado por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago, en el proceso ejecutivo laboral instaurado por la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** en contra de la sociedad **AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.**

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos.

ANTECEDENTES:

La sociedad PORVENIR S.A. formuló demanda ejecutiva laboral en contra de la empresa AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A., solicitando se libre mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:

-\$23.917.865 por concepto de cotizaciones pensionales dejadas de pagar por la ejecutada en calidad de empleadora por los periodos comprendidos entre diciembre de 1996 a enero de 2021.

-\$61.374.200 por concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los periodos adeudados y relacionados en el título ejecutivo que se han causado a la fecha desde la fecha en que se debió cumplir la obligación de cotizar, debiendo ser liquidados a la fecha del pago efectivo.

Asimismo, solicita que los títulos judiciales sean emitidos exclusivamente a nombre de PORVENIR S.A. y se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

Como fundamento fáctico de lo pretendido, PORVENIR S.A., Indica que los trabajadores relacionados en el título ejecutivo se encuentran vinculados a PORVENIR S.A., respecto de quienes la demandada no ha cumplido la obligación de pagar los aportes a pensiones por los periodos discriminados en dicho título ejecutivo.

Indica que conforme los lineamientos legales y de la UGPP, se adelantaron las gestiones de cobro persuasivas y prejurídicas, requiriendo a la demandada para el pago de las cotizaciones pensionales obligatorias adeudadas desde el periodo de diciembre de 1996 hasta enero de 2021, conforme el procedimiento establecido en el artículo en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, esto es, remitiendo comunicación del 18 de mayo de 2021, a la dirección de notificación del empleador demandado concediéndole el plazo de ley, además de enviarle requerimientos a las direcciones electrónicas GRUPO20@UNE.NET.CO.

Aduce que, a pesar de la gestión de cobro, la empresa demandada continúa renuente al cumplimiento de su obligación.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante providencia del 19 de julio de 2022 el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN negó el mandamiento de pago solicitado por PORVENIR S.A. en contra de la SOCIEDAD AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.

Para proferir esta decisión, la *a quo* explicó que conforme la normatividad que regula este tema, las administradoras de pensiones tienen la potestad de constituir el título ejecutivo, pero estableciendo unos plazos para ello y no en cualquier tiempo; de no ser así, el trabajador correría el riesgo de perder el recaudo de sus aportes y que la administradora se exonere de responsabilidad aduciendo que cumplió con el requerimiento y cobro al empleador así lo haya hecho en cualquier tiempo.

Señala que la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en providencia del 30 de septiembre de 2021 proferida dentro del proceso radicado No. 05001310500620200044000 confirmó la decisión que negó mandamiento de pago por la tardía acción de la AFP, teniendo en cuenta la Resolución 2082 de 2016 de la UGPP en la cual se fijaron los estándares para adelantar las acciones de cobro.

Dice la *a quo* que al verificar si PORVENIR S.A. cumplió los estándares establecidos por la UGPP en la Resolución 2082 de 2016, encuentra que según la liquidación aducida como título ejecutivo efectuada el 25 de agosto de 2021, corresponde a presuntas obligaciones causadas entre diciembre de 1996 a enero de 2021, esto es, entre 25 y 7 meses después de vencido el plazo legal para cumplir la obligación del empleador y la correlativa obligación de la AFP de requerirlo y cobrarle el pago, así como 5 años después de la expedición de la Resolución 2082 de 2016, siendo inadmisibile que la AFP ejecutante pueda constituir por ella misma título ejecutivo, años después de que el empleador presuntamente incurrió en mora, momento para el cual puede que ya no exista, no tenga forma de desvirtuar la obligación o carezca de recursos para cumplirla.

Concluye entonces que al sobrepasarse los términos temporales no es posible reconocer la calidad de título ejecutivo del documento aducido por PORVENIR S.A. quedándole la vía ordinaria para acreditar la existencia de la obligación con la citación de los trabajadores a favor de quienes se puede discutir la imprescriptibilidad de la obligación del pago de cotizaciones.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

El apoderado judicial de PORVENIR S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, señalando que debe tenerse en cuenta que la Resolución 1702 de 2021 expedida por la UGPP, subrogó la Resolución 2082 de 2016 y empezó a regir el 29 de junio de 2022, conforme la cual se emitió la liquidación que presta mérito ejecutivo sin mayores exigencias que la de cumplir lo señalado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, donde se ordena de manera precisa y sin lugar a equívocos o confusiones, que la liquidación presta mérito ejecutivo para adelantar las acciones de cobro.

Cita el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, alegando que conforme esta esta norma, la configuración del título ejecutivo requiere únicamente enviar un requerimiento al empleador moroso, otorgarle el término de 15 días para que se pronuncie y finalmente, emitir la liquidación determinando el valor adeudado.

Indica que, en este caso, el título ejecutivo es complejo al estar integrado por el requerimiento y la liquidación, tal como lo indicó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 30 de noviembre de 2000, al reconocer que las normas regulatorias del cobro coercitivo de los aportes son las contenidas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1161 de 1994 y el Decreto 1463 de 1994 que reglamenta los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993.

Manifiesta que los requisitos que conforman el título ejecutivo fueron cumplidos a cabalidad, por lo que el no librar mandamiento de pago, vulnera el derecho fundamental de los afiliados a la seguridad social, obstruye el cobro de los periodos dejados de cancelar, beneficia al empleador moroso y genera el riesgo de que no se pueda localizar al demandado o se liquide, imposibilitando la recuperación de los aportes.

Expone que la Resolución 444 de 2013 emitida por la UGPP creada para la regulación de las acciones de cobro adelantadas por los fondos no modifica lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, sin que se pueda exigir requisitos adicionales a los previstos por las normas generales; los estándares de cobro solo rigen entre la UGPP y las AFP, generándose sanciones en caso de incumplimiento, pero sin estar establecido que dentro de los procesos judiciales se realice control y seguimiento a las acciones que ya han sido vigiladas por el ente creado para tal fin.

En lo que respecta la imprescriptibilidad de la obligación del pago de las cotizaciones, el apelante se remite al artículo 48 de la Constitución Política, al concepto No. 2008052709-001 de la Superintendencia Financiera de Colombia y a jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo anterior, solicita se revoque el auto del 19 de julio de 2022, y en su lugar, se libere mandamiento de pago a favor de PORVENIR S.A.

En auto del 9 de febrero de 2023, la juez de conocimiento no repuso la decisión, concediendo el recurso de apelación.

DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que decida sobre el mandamiento de pago conforme al Art. 65 del CPTSS se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,

según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”.*

En la forma como quedó sustentado el recurso de apelación, se analizará si el documento base de ejecución, esto es la *liquidación de aportes pensionales adeudados*, satisface las exigencias de ley (artículos 24 Ley 100 de 1993, en concordancia con el 100 del C. P. T. y de la S.S. y 422 del C.G. del P.).

En lo que respecta al título ejecutivo en los cobros de las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones en mora a cargo de empleadores, la ley 100 de 1993, ha previsto que prestan mérito ejecutivo las liquidaciones mediante las cuales las administradoras establezcan la deuda de los empleadores respecto de los aportes en mora.

En tal sentido establece el artículo 24 de la citada Ley, lo siguiente:

“ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.”

Para hacer efectiva esta disposición el Decreto 2633 de 1994 estableció:

“Artículo 5° Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades Administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.”

De las normas citadas, resulta claro que la AFP que pretenda adelantar un cobro ejecutivo de esta naturaleza ha de aportar prueba del requerimiento hecho a la persona frente a quien pide el mandamiento de pago, y la liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora.

Así que, el requerimiento al empleador, regulado en el citado artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, exige como único requisito para cumplir el requerimiento, que la AFP dirija una comunicación al empleador moroso, resultando obvio que debe aparecer acreditado que dicha comunicación efectivamente haya sido puesta en su conocimiento.

Analizado las anteriores exigencias respecto del requerimiento y posterior liquidación del crédito que presta mérito ejecutivo, debemos tener en cuenta que este título ejecutivo debe cumplir con los parámetros normativos, esbozados en el artículo 100 del C. P. T. y de la S.S, conforme el cual *“será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme”*. Norma que debe concordarse con el artículo 422 del C. G. P., al que nos remitimos por expresa disposición del artículo 145 del CPL, el cual dispone que *“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley...”*

La Jurisprudencia ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante. Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.¹

Una obligación es expresa, cuando es inequívocamente determinable o determinada en el documento; es clara, cuando consta su elemento subjetivo del acreedor y deudor, así como el objeto de la prestación debida, perfectamente individualizada y es exigible, cuando no está sometida a plazo o condición.

¹ Consejo de Estado. Auto 4 de mayo de 2000, expediente N° 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S. A

Requisitos que han sido analizados por nuestro órgano de cierre, trayendo a colación la sentencia de tutela STL2826 -2015, en la que se indicó:

“En tratándose de acciones ejecutivas, no cabe espacio para la duda, la suposición o la extracción conclusiva respecto de las obligaciones a ejecutar, como se ha decantado a lo largo de los años por la jurisprudencia y la doctrina, y claramente lo reguló la norma en comento”. (Resalto fuera del texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso concreto, esta Sala encuentra que PORVENIR S.A. cumplió con los presupuestos normativos, dado que requirió a la sociedad AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A. informándole sobre la deuda por concepto de aportes pensionales de 13 afiliados entre los periodos de diciembre de 1996 a enero de 2021, correspondientes a la suma de \$23.917.865; le explicó los pasos que debía seguir, y advirtió que disponía de un término de quince (15) días para efectuar el proceso de aclaración so pena de entenderse su conformidad con el estado de la cuenta y emitirse la liquidación jurídica de los aportes en mora (folios 24 a 30 archivo 02Demanda).

Igualmente se acredita que la anterior comunicación fue remitida a la empresa de manera electrónica a la dirección grupo20@une.net.co que es la destinada para recibir notificaciones como se observa en el certificado de existencia y representación (folios 43 a 54 archivo 02Demanda); estando demostrado asimismo, que la remisión de este *e-mail* se hizo a través de la empresa de mensajería 4-72 quienes certifican que el mensaje fue entregado el 18 de mayo de 2021 a las 18:55 horas (folios 31 y 32 archivo 02Demanda).

Ante el silencio del ejecutado, el 25 de agosto de 2021, PORVENIR S.A. realizó la liquidación de aportes pensionales adeudados respecto de los presuntos trabajadores José Aníbal Montoya Correa, David Córdoba Valencia, Adalberto Manuel Pineda Buelvas, Fernando José Bustillo Hernández, Carlos Gustavo Rivera Martínez, Héctor José Ibargüen Murillo, Juan Batista Pauth Beltrán, Sigifredo Enrique Mesa Gil, Oscar David Negrete Saavedra, Diego Córdoba Romaña, Hugo Lenin Linán Pertuz, Francisco Javier Copete Copete y Jorge Eliecer Mejía Miranda. Esta liquidación contiene el respectivo detalle de los periodos y valores adeudados por la ejecutada respecto de cada uno de estas personas, que estima PORVENIR S.A., que asciende a la suma de \$23.917.865 por concepto de capital y \$61.374.200 por concepto de intereses liquidados a la fecha del cálculo (folios 15 a 23 archivo 02Demanda).

Así, examinado el título base de ejecución advierte la Sala que es claro, expreso y exigible respecto de los aportes adeudados por la sociedad hoy ejecutada en relación

a los trece trabajadores reseñados en la liquidación, existiendo certeza acerca de quién es el deudor, es decir, la sociedad hoy ejecutada, así como del capital por aportes adeudado. En cuanto a los intereses, se tiene que no fueron incluidos en el requerimiento al empleador; observándose que al final del detalle de los periodos debidos adjunto al requerimiento, se le advierte al empleador que el total de la deuda no incluye intereses moratorios, debiendo liquidar el valor de la mora a la fecha del pago, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que conforme los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras del Sistema de Protección Social, uno de los requisitos del aviso de incumplimiento es que se relacione el periodo adeudado, indicando claramente mes y año, por lo que los intereses son accesorios y se pueden determinar al momento de liquidar el crédito, dado que incluso, se siguen causando con posterioridad la requerimiento.

Es importante dejar claro que contrario a lo señalado por la *a quo*, la tardanza de la administradora para instaurar la acción judicial correspondiente, no constituye un impedimento para la existencia y validez del título ejecutivo; dicho en otras palabras, entrar a verificar si la entidad actuó con prontitud con miras a establecer si logra o no constituir dicho título, representa una exigencia que no trae la norma legal.

En ilación con lo anterior, la Sala no desconoce que la UGPP estableció en la Resolución 444 de 2013 los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras del Sistema de Protección Social, en uso de las facultades conferidas por la Ley 1151 de 2007 artículo 156, la Ley 1607 de 2012 artículo 178 y el Decreto 575 de 2013.

Dicha Resolución 444 de 2013, fue subrogada por la Resolución 2082 de 2016 de la UGPP, en la cual se siguió regulando el procedimiento a seguir para el cobro de los aportes, la cual a su vez fue subrogada por la Resolución 1702 de 2021, la cual dispone en el artículo 10 que para iniciar las acciones judiciales es suficiente con la constitución del título ejecutivo que presta mérito ejecutivo; reza esta norma:

“ARTÍCULO 10. CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO. La Unidad verificará que las administradoras privadas y públicas hayan expedido en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha límite de pago, la liquidación o acto administrativo que preste mérito ejecutivo, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables al respectivo subsistema.

Para iniciar las acciones de cobro coactivo o judicial será suficiente la constitución del título que presta mérito ejecutivo. Las acciones persuasivas y el aviso de incumplimiento no son actuaciones que complementen el título.”

Esta Resolución 1702 de 2021 establece en el Título II el procedimiento sancionatorio para cuando se incumple los estándares de cobro, estableciendo en el artículo 15 las conductas constitutivas de incumplimiento y respectiva sanción pecuniaria, entre las que se encuentran el no constituir el título ejecutivo en el plazo señalado.

En este orden de ideas, aunque es claro que las administradoras deben cumplir los estándares de cobro establecidos por la UGPP –actualmente en la Resolución 1702 de 2021- no es menos cierto que la consecuencia de la inobservancia de tal procedimiento es una sanción disciplinaria, mas no que el título ejecutivo legalmente constituido en los términos del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2633 de 1994, pase a ser inexistente o pierda su validez.

De otro lado, en cuanto a la imprescriptibilidad de la obligación del pago de las cotizaciones respecto de la cual, el apelante dedica varias líneas en su recurso, debe señalarse este tema no fue abordado por la *a quo*, pues fue únicamente en el último párrafo del auto recurrido, donde la juzgadora simplemente manifestó que a la AFP le quedaba la vía ordinaria para acreditar la existencia de la obligación donde podía discutir a favor de los afiliados la imprescriptibilidad de la obligación. Por tal motivo, en esta instancia no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre la prescripción o no de la obligación, además que el debate sobre este aspecto, no se debe dar en esta etapa primigenia del proceso en la que apenas está en discusión si hay lugar a librar mandamiento de pago.

Corolario de todo lo anterior, encuentra este cuerpo colegiado que no existe duda sobre la claridad y expresividad del título ejecutivo el cual cumple con las características para considerarse como tal, dado que refleja claramente una deuda con el fondo de pensiones.

Por lo expuesto anteriormente, se revocará el auto que negó la orden de apremio, pues dada la idoneidad de liquidación de aportes como título ejecutivo, resulta pertinente ordenarle al juez de instancia que libere el mandamiento de pago frente a las obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en la liquidación de aportes pensionales adeudados, obviamente sin perjuicio de la oposición que pueda realizar la ejecutada una vez le sea notificado el mandamiento de pago.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto apelado del 19 de julio de 2022, proferido por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro del proceso ejecutivo promovido por la **AFP PORVENIR S.A.** en contra de la sociedad **AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.**, frente a la negativa de librar el mandamiento de pago solicitado, para en su lugar, **ORDENAR** librar la orden de apremio frente a las obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en la liquidación de los aportes pensionales adeudados, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la 31 providencia se notificó por estados N °
143 del 18 DE AGOSTO DE 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **997b1e4cb5f244f01a08b2c785495fe3990bc9e6dc0bc0a3174c34aa3ca7f9e8**

Documento generado en 17/08/2023 02:35:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>